

Santiago, uno de junio de dos mil veintidós.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que en este procedimiento de liquidación voluntaria de la empresa deudora de la Ley N°20.720, seguido ante el Segundo Juzgado de Letras de Los Ángeles bajo el Rol C-4297-2019, caratulado “/Maderas Río Colorado S.A.”, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de casación en el fondo deducido por los acreedores Jorge Manuel Melo Betancur y Eduardo Sebastián Yáñez Melo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, de fecha tres de febrero de dos mil veintidós, que confirmó el fallo de primer grado de nueve de octubre de dos mil veinte, por el cual acogió las impugnaciones deducidas por el liquidador titular y el Banco de Chile en contra de los créditos verificados respecto de las preferencias alegadas.

Segundo: Que el recurrente expresa que el fallo cuestionado infringe los artículos 2469, 2470, 2472 N°5 y N°8 y 2488 del Código Civil, y 241 de la Ley N°20.720. Sostiene que la sentencia recurrida acoge las impugnaciones de los créditos, nos obstante que éstos sí cumplen los requisitos legales para gozar de las preferencia alegadas, al ser acreencias laborales que emanan de una sentencia judicial, la que si bien fue dictada con posterioridad a la resolución que decretó la liquidación de la empresa deudora, sus orígenes son anteriores a ella, ya que los contratos de trabajo fueron celebrados en marzo y abril de 2016, respectivamente.

Finaliza pidiendo que se invalide la sentencia y se dicte una de reemplazo que rechace las impugnaciones deducidas de los créditos en contra de las preferencias alegadas.

Tercero: Que para una adecuada inteligencia de las cuestiones planteadas en el recurso, resulta pertinente considerar las siguientes circunstancias y actuaciones verificadas en el proceso:

a) La presente causa se inició el 18 de octubre de 2019, mediante solicitud de liquidación voluntaria de la empresa Maderas Río Colorado S.A., declarándose ésta por resolución de fecha 21 de noviembre del mismo año.

b) A folio 303, con fecha 20 de julio de 2020, compareció el abogado Rodrigo Eduardo Cabezas González, en representación de Jorge Manuel



Melo Betancur y Eduardo Sebastián Yáñez Melo, verificando créditos por \$35.239.553.- y \$8.100.780.-, respectivamente. Señaló que los créditos tienen su origen en las obligaciones que nacen de la relación laboral existente con la empresa deudora, las cuales se encuentran impagas y establecidas por sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Los Ángeles en causa Rit O-6-2020 y por su naturaleza gozan de preferencia del artículo 2472 N°5 y 8 del Código Civil.

c) A folios 312 y 320, comparecen, respectivamente, el acreedor Banco de Chile y la Liquidadora doña Valeria Cañas Aranda, impugnando los créditos verificados - en lo que interesa al recurso- en cuanto a la preferencia alegada, ya que los ex trabajadores son personas relacionadas de la empresa deudora en los términos que lo dispone el artículo 2 N°26 de la Ley N°20.720, por lo que en virtud del artículo 241 inciso final del mismo cuerpo normativo, los créditos verificados deben ser pospuestos en su pago aun después de los acreedores valistas.

d) Evacuando el traslado conferido en la audiencia de impugnación, el abogado de los acreedores impugnados instó por el rechazo de las impugnaciones señalando que los créditos verificados sí gozan de la preferencia alegada, por tener su origen en contratos de trabajos celebrados con anterioridad a la resolución que declaró la liquidación de la empresa deudora.

e) El tribunal de primera instancia acogió las impugnaciones, decisión que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Concepción.

Cuarto: Que, en lo que interesa al recurso, el fallo impugnado para acoger la impugnación al crédito verificado por Jorge Manuel Melo Betancur, tuvo en consideración lo dispuesto en el artículo 241, inciso final, de la Ley N°20.720 en relación con el artículo 2 N°26 a) del mismo cuerpo legal, ya que, en cuanto al primer supuesto que exige la norma, se acreditó mediante certificados de nacimiento incorporados al proceso que Jorge Manuel Melo Betancur es hermano de Rodolfo Melo Betancur, quien fue Gerente General y principal socio de la empresa deudora, por lo que el acreedor se encuentra en la hipótesis de persona relacionada que contempla el artículo 2 N°26 letra a) de la Ley N°20.720. Agrega que, en cuanto al segundo requisito para que opere la impugnación deducida, esto es, que el



crédito no se encuentre debidamente documentado 90 días antes de la Resolución de Liquidación, consta que el instrumento fundante del crédito que verifica el acreedor corresponde a una sentencia dictada en causa Rol O-6-2020, por el Juzgado de Letras del Trabajo de Los Ángeles, con fecha 20 de julio de 2020 y la Resolución de Liquidación Concursal fue dictada con posterioridad el 21 de noviembre de 2019, por lo que concurre el supuesto señalado en la norma, ya que el documento fundante del crédito no es el contrato de trabajo sino que la sentencia judicial laboral. Concluye que, atendido que el acreedor se encuentra en la situación del inciso final del artículo 241 de la Ley N°20.720, su pago debe quedar pospuesto en los términos que dicha norma consigna, de modo que acogió las impugnaciones deducidas.

En lo referente al acreedor Eduardo Sebastián Yáñez Melo, la sentencia impugnada de igual forma estableció -mediante los certificados de nacimientos respectivos- que el señor Yáñez Melo es persona relacionada por ser sobrino de Rodolfo Melo Betancur, quien fue Gerente General y principal socio de la empresa deudora, en los términos que lo dispone el artículo 2 N°26 a) de la Ley N°20.720. En cuanto al segundo requisito, tiene por sentado que el documento fundante del crédito que verifica el acreedor es la sentencia dictada el 20 de julio de 2020, en causa Rol O-6-2020, del Juzgado de Letras del Trabajo de Los Ángeles, que es posterior a la Resolución de Liquidación de fecha 21 de noviembre de 2019, por lo que el crédito verificado no cumple con el requisito de estar documentado antes de 90 días a la resolución de liquidación. Concluye que, atendido que el acreedor impugnado se encuentra en la situación del inciso final del artículo 241 de la Ley N°20.720, su pago debe quedar pospuesto en los términos que dicha norma consigna, motivo por el cual acoge las impugnaciones formuladas.

Quinto: Que el artículo 241 de la Ley N°20.720 dispone: “Orden de prelación. Los acreedores serán pagados de conformidad a lo dispuesto en el Título XLI del Libro IV del Código Civil y, en el caso de los acreedores valistas, con pleno respeto a la subordinación de créditos establecida en la referida normativa. Para su eficacia, la subordinación deberá ser alegada al momento de la verificación del crédito por parte del



acreedor beneficiario o bien notificarse al Liquidador, si se establece en una fecha posterior.

Los créditos de la primera clase señalados en el artículo 2472 del Código Civil preferirán a todo otro crédito con privilegio establecido por leyes especiales.

Los acreedores Personas Relacionadas del Deudor, cuyos créditos no se encuentren debidamente documentados 90 días antes de la Resolución de Liquidación, serán pospuestos en el pago de sus créditos aun después de los acreedores valistas.”

A su vez, el artículo 2 N°26 de la misma ley señala “26) Persona Relacionada: Se considerarán Personas Relacionadas respecto de una o más personas o de sus representantes, las siguientes: a) El cónyuge, los ascendientes, descendientes y colaterales por consanguinidad o afinidad hasta el sexto grado inclusive y las sociedades en que éstos participen, con excepción de aquellas inscritas en el Registro de Valores.”

Sexto: Que de conformidad con lo reseñado en el motivo que precede, previo examen de las actuaciones, presentaciones y resoluciones verificadas en el proceso, es posible concluir que los sentenciadores han hecho un acertado análisis de las situaciones fácticas pertinentes a la controversia objeto del incidente, para proceder, a continuación, a efectuar una correcta aplicación de la normativa atinente al caso de que se trata.

En efecto, se estableció por los jueces del fondo –mediante los certificados de nacimiento respectivos- que los acreedores impugnados son personas relacionadas de la empresa deudora en los términos que dispone el artículo 2 N°26 letra a) de la Ley N°20.720 y que el documento fundante del crédito de ambos acreedores es la sentencia laboral de fecha 20 de julio de 2020, dictada en causa Rol O-6-2020, del Juzgado de Letras del Trabajo de Los Ángeles, la que es posterior a la Resolución de Liquidación de la empresa deudora de 21 de noviembre de 2019. Bajo esas circunstancias, concurren los dos supuestos que contempla el artículo 241, inciso final, de la Ley N°20.720, por lo que los créditos verificados debían ser pospuestos en el pago de ellos aun después de los acreedores valistas, no gozando, en consecuencia, de las preferencias alegadas de los numerales 5° y 8° del artículo 2472 del Código Civil, como acertadamente se resolvió por los



jueces del fondo, no vislumbrándose, en consecuencia, transgresión a la normativa citada.

Séptimo: Que por los razonamientos anteriores, el recurso de casación en el fondo que se analiza adolece de manifiesta falta de fundamento, motivo por el que no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el abogado Carlos Salazar Sazo, en representación de los acreedores Jorge Manuel Melo Betancur y Eduardo Sebastián Yáñez Melo, en contra de sentencia de tres de febrero de dos mil veintidós dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción.

Regístrese y devuélvase, vía interconexión.

Rol N°7.297-2022.-



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Guillermo Enrique Silva G., Arturo Prado P., María Angélica Cecilia Repetto G. y los Abogados (as) Integrantes Diego Antonio Munita L., Raul Fuentes M. Santiago, uno de junio de dos mil veintidós.

En Santiago, a uno de junio de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

